

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 6° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-26793-2019
CARATULADO : FISCO DE CHILE/COMERCIALIZADORA DE
MADERAS BALTO SPA

Santiago, doce de Abril de dos mil veintidós

VISTOS:

Que, a folio 1, comparece Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación legal del Fisco de Chile, corporación de derecho público, ambos domiciliados en Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, y asumiendo la representación del Fisco de Chile - Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, órgano de la administración centralizada del Estado que carece de personalidad jurídica propia, interpone demanda ejecutiva en contra de Comercializadora de Maderas Balto SpA., representada legalmente por Juan José Sanz García, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en Carlos Valdovinos N° 3947, comuna de Cerrillos, a fin de que se despache mandamiento de ejecución y embargo por la suma de 300 Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.), equivalentes a la fecha de interposición de esta demanda a \$14.709.900, conforme al valor de la U.T.M. correspondiente al mes de agosto de 2019, ascendente a la cantidad de \$49.033, más intereses, reajustes y costas.

Fundamenta su presentación, señalando que por sentencia N° 325, de fecha 18 de enero de 2018, pronunciada por Carlos Aranda Puigpinos, Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, se aplicó a Comercializadora de Maderas Balto SpA una multa de 500 UTM.

Relata que con fecha 11 de mayo de 2018, se dictó la Resolución Exenta N° 3370, que dio lugar a la reposición incoada por Comercializadora de Maderas Balto SpA., rebajando la multa aplicada a 300 UTM.

Esgrime que la sentencia sanitaria y la resolución que resolvió la solicitud de reposición planteada por la demandada se encuentran ejecutoriadas, según consta de certificado de 10 de octubre de 2018, emanado de Gabriel Antivilo Bruna, quien fue designado como Ministro de Fe del departamento jurídico de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, según Resolución Exenta N° 486, de 20 de abril de 2016.

En este sentido, arguye que Comercializadora de Maderas Balto SpA adeuda al Fisco de Chile la suma de 300 UTM, en virtud de la Ley N° 20.724 que modificó el Código Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos, de fecha 14 de febrero de 2014, reemplazando el inciso segundo del artículo 174 del Código Sanitario, señalando expresamente que “las resoluciones que establezcan las infracciones y



Foja: 1

determinen las multas tendrán merito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.”

En último término, señala que la obligación es líquida, actualmente exigible y su acción no se encuentra prescrita, por lo que solicito la ejecución de dicha obligación.

Que, con fecha 17 de agosto de 2020, comparece Rodrigo Javier Pérez Calaf, abogado, en representación de la sociedad Comercializadora Maderas Balto SpA., ejecutada de autos, oponiendo las excepciones del artículo 464 N° 4 y N° 7 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto de la excepción de ineptitud del libelo, señala que no se hace mención alguna a los antecedentes de hechos que sustentan el presunto título ejecutivo, toda vez que sólo se indica un monto y citan una resolución administrativa que habría aplicado una multa, pero se omiten todos los antecedentes del título que sustentan la presunta obligación crediticia que se demanda, por lo que dicho antecedentes no pueden omitirse en la demanda ejecutiva, ya que deben detallarse la causa de la obligación de manera de una adecuada defensa del ejecutado, razón, por la cual, el título o instrumento en consecuencia deben ser debidamente explicitado y detallado, en cuanto origen del mismo y causa de la obligación.

En lo tocante a la excepción del artículo 464 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, expresa que a la fecha no se encuentra firme y ejecutoriada la el título de marras, por tanto, la obligación contenida no es actualmente exigible.

En efecto, señala que la Resolución N°03370 de fecha 11 de mayo de 2018 que acogió el recurso de reposición deducido por ésta parte, y que rebajó la multa inicial, fue oportunamente impugnada por su representada, mediante reclamo judicial presentado en el 7° Juzgado Civil de Santiago en los autos C-16322-2018 de conformidad al artículo 171 del Código Sanitario, en virtud del cual se requirió no sólo que se deje sin efecto la multa sino que en subsidio se solicitó reducir sustancialmente la multa.

Que, con fecha 24 de agosto de 2020, rola evacuado el traslado conferido a la parte ejecutante, solicitando el total rechazo de las excepciones opuestas, con costas.

Que, con fecha 22 de septiembre de 2020, se declararon admisibles las excepciones promovidas en autos, recibándose la causa a prueba por el término legal establecido, suspendiéndose su cómputo a virtud de la Ley N° 21.226.

Que, con fecha 18 de noviembre de 2021, figura reactivado el término probatorio de conformidad a la Ley N° 21.379.

Que, con fecha 12 de abril de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO: Que según lo dispone el artículo 1698 del Código Civil, corresponde la prueba de la existencia de las obligaciones, o su extinción, al que alega



Foja: 1

aquellas o ésta y que en orden a evacuar dicha carga procesal el ejecutante acompañó la sentencia definitiva sub-lite e individualizados en la parte expositiva del presente fallo.

Que el instrumento referidos no fueron objetados en contrario, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 N° 3 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 1.700 del Código Civil, permite tener por suficientemente acreditada la existencia y términos de la obligación crediticia cuyo pago se pretende en autos.

SEGUNDO: Que, la ineptitud del libelo ha de ser analizada como una excepción que apunta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, norma que pretende garantizar el inicio del procedimiento en forma suficientemente clara y precisa, con el objeto de no vulnerar la debida defensa de los demandados y con ello garantizar el respeto a los principios que informan un debido proceso.

De la misma forma la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que se entiende que un libelo es inepto en sí, cuando omitiéndose alguno de los requisitos establecidos en el artículo 254 del código precitado, aquel se torna vago, confuso e ininteligible en términos tales que hagan imposible a los demandados plantear sus defensas, cuestión que manifiestamente no ocurre en el caso de marras.

TERCERO: Que, respecto a la alegación de la demandada en relación a la omisión de los requisitos para sustentar el título ejecutivo sub-lite, tornando confuso y vago la pretensión del actor, de la simple lectura del libelo en cuestión se aprecia que este cumple cabalmente con lo ordenado en el numerales 2, 3 y 4 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que para que se configure el yerro que provoque la ineptitud del libelo, debe tratarse de un error de tal entidad que no permita la comprensión cabal de la pretensión ejercida y, por ende, no permita la adecuada defensa de la contraparte, motivo por el cual la presente alegación será desestimada, tal como se dirá en lo resolutivo del fallo.

CUARTO: Que, en cuanto a la excepción del artículo 464 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, fundada en que la sentencia definitiva que aplicó una multa sanitaria por la cantidad de 300 U.T.M. carece de exigibilidad por no encontrarse firme y ejecutoriada, es preciso señalar que el artículo 172 del Código Sanitario expresa que las multas aplicadas de acuerdo a los sumarios tramitados conforme al mismo cuerpo normativo precitado y que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo de conformidad al artículo 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por tanto, que se trate de una obligación actualmente exigible significa que para deducir la acción ejecutiva la obligación a realizar debe ser exigible al tiempo de presentarse la demanda, esto es, que la obligación que se persigue no esté sujeta a modalidad, es decir, condición, plazo o modo.

Por su parte, la liquidez de la misma, significa que en los juicios ejecutivos de obligación de dar, la obligación debe ser líquida o liquidable, esto es, el objeto de ella



Foja: 1

debe estar perfectamente definido, sea en su especie o género y cantidad, a partir del solo examen de título ejecutivo.

Que, a mayor abundamiento, el hecho que existe en la especie una discrepancia respecto al monto exacto y efectivo que se adeuda no convierte la obligación en ilíquida y menos aún le resta validez al título que sirve de fundamento a la ejecución.

Que, respecto de esto, debemos tener presente lo dispuesto en el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que “Se entenderá cantidad líquida, no sólo la que actualmente tenga esta calidad, sino también la que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas con sólo los datos que el mismo título suministre”.

Que, por último, respecto a que la obligación no se encuentre prescrita quiere decir que no haya transcurrido el plazo legal para exigir el cobro de la misma, lo que en la especie no ocurre.

QUINTO: Que, en consecuencia, el título ejecutivo materia de la presente ejecución cumple con todos u cada uno de los requisitos para otorgarle fuerza ejecutiva, razón por la cual, la excepción opuesta por la demandada deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 102 y siguientes de la Ley N° 18.092, artículo 1698 y 2131 y siguientes del Código Civil; 144, 170, 254, 346 N°3, 434, 464 N° 4 y N° 7, 470 y 471 del Código de Procedimiento Civil se declara:

I.- Que, se rechazan las excepciones de los numerales 4 y 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil opuesta por el demandado y, en consecuencia, se ordena seguir adelante con la ejecución hasta hacer entero y cumplido pago de la obligación que se cobra en estos autos, más los intereses pactados.

II.- Que, se condena en costas al ejecutado.

III.- Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL N° C-26793-2019

Dictada por Mindy Villar Simon, Juez Suplente del Sexto Juzgado Civil de Santiago.

Autorizada por María Elena Moya Gúmera, Secretaria Subrogante del Sexto Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, doce de Abril de dos mil veintidós**



